

El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

LAS POSIBLES CONSECUENCIAS DEL CASO ODEBRECHT EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERUANO

La corrupción pasa la factura a la economía



GIANFRANCO Castagnola

Presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría

La economía peruana continuó enfriándose en el último trimestre del 2016. Se esperaba que los esfuerzos de destrabe de proyectos de inversión de gran escala, las expectativas positivas por el mejor entorno de negocios generado por el paquete de decretos legislativos y el “asentamiento” del equipo ministerial del nuevo gobierno luego de los meses de transición permitieran vislumbrar el inicio de una gradual recuperación de nuestra economía hacia mediados del 2017. Sin embargo, la divulgación a fines de diciembre de sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios peruanos abrió una caja negra de imprevisibles consecuencias políticas e institucionales, que pasará la factura a la actividad económica.

En el último trimestre del 2016 el PBI no primario –que excluye a las actividades extractivas– creció en menos de 1%. En el primer semestre lo había hecho a más de 3% y en el tercer trimestre a 2%. La tendencia se había acentuado a fines de año, producto del ajuste fiscal –de oportunidad y magnitud discutibles– que aplicó el gobierno, que significó una retracción de la inversión pública en 24%. El impacto en la construcción y en industrias vinculadas a esta fue significativo. La producción de cemento, por ejemplo, se redujo en 7,5% en ese período. Con una inversión privada que seguía contrayéndose, era previsible que el empleo no creciera, lo que afectó el consumo privado.

Esta disminución de la actividad privada empezaba a afectar las expectativas empresariales, puesto que se había supuesto que un gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski generaría, per se, una mejora económica. En ese contexto, los decretos legislativos trajeron muy buenas noticias. Estos no solo apuntan en la dirección correcta, sino que constituyen el paquete más potente de simplificación administrativa de los últimos 20 años. Contienen, además, normas muy positivas orientadas a la

agilización de la inversión privada y de alianzas público-privadas. Si bien no es un paquete reactivador, sí mejora el entorno de negocios –y el día a día de los ciudadanos–. Tenía, también, el potencial de generar un quiebre en las expectativas.

Lamentablemente, el escenario ahora es otro. Lava Jato finalmente llegó al Perú y se quedará dominando la agenda política por muchos meses. No es para menos. Las cifras de los sobornos –las conocidas y las estimadas– son muy altas. Involucran proyectos de inversión emblemáticos de los últimos 15 años, como la Interoceánica y la línea 1 del metro. Tienen como protagonistas a políticos de alto nivel y a empresas privadas grandes, de alto perfil. El costo directo para el país –entre obras que no debieron ejecutarse y otras cuyos costos se inflaron– es de muchos centenares de millones de dólares. Según Ipsos, la gran mayoría de la población cree que nuestros últimos tres presidentes y dos alcaldes de Lima recibieron sobornos. Y que las investigaciones se estén haciendo en Brasil, Suiza y Estados Unidos, con mecanismos de colaboración como la delación premiada, genera la expectativa de que todo se sabrá.

La magnitud de esta crisis institucional la iremos conociendo en los próximos meses. Mientras tanto, la economía empieza a resentir su impacto a través de varios canales. Uno primero, obvio, es que la paralización de la construcción del gasoducto sur peruano, que desde todo punto de vista es correcta, costaría 0,4 puntos de crecimiento este año.

En segundo lugar, la incertidumbre ha aumentado. El no saber qué se descubrirá y qué impacto tendrá hace que familias y empresas sean más cautas a la hora de tomar sus decisiones de consumo e inversión. En tercer lugar, es previsible que los funcionarios se vuelvan mucho más conservadores y, quizás, burocráticos, en licitaciones públicas, procesos de concesiones, firmas de adendas –en muchos casos, necesarias–, etc. La desconfianza y el temor naturalmente aflorarán en muchos de ellos. En el camino, existe el riesgo adicional de que la respuesta a esta brutal corrupción sea la de atacar las concesiones y exigir un mayor protagonismo del Estado en la economía –ignorando que, en este siglo, los tres regímenes más corruptos en América Latina fueron, precisamente, aquellos donde hubo

mayor intervención estatal: Brasil (cuna de Lava Jato), Venezuela y Argentina–.

El gobierno tiene un formidable reto por delante. Por un lado, debe procurar extirpar toda presencia de empresas corruptas en proyectos de obras públicas y concesiones. Pero al hacerlo debe respetar el debido proceso y, a la vez, evitar disrupciones operativas que tengan un impacto negativo.

Luego, tiene que revisar cómo fue posible que concursos públicos donde había tanto en juego fueran tan amañados. No se trata de insistir en formalidades absurdas que son inútiles. Es paradójico que toda esta gran corrupción se haya dado en el marco de una ley de contrataciones especialmente formalista y reguladora, y libre de observaciones del sistema nacional de control. De la capacidad de sacar lecciones dependerá la calidad de la solución que se le dé.

Finalmente, el MEF tendrá que promover una política fiscal más audaz. El anuncio del



“No saber qué se descubrirá hace que familias y empresas sean más cautas a la hora de tomar decisiones de consumo y de inversión”.

ministro Alfredo Thorne de un mayor gasto de S/4.000 millones –más un adelanto de S/5.000 millones a los gobiernos subnacionales– es muy positivo. Su desafío será lograr que las entidades públicas gasten estos recursos en este nuevo entorno. ■



ILUSTRACIÓN: GIOVANNITAZZA

EL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL ENFOCADO EN LA RECUPERACIÓN DEL CENTRO DE LIMA

Rescatando el Centro Histórico



ERNESTO Arias Valverde

Arquitecto

La semana pasada el Ministerio de Cultura constituyó un grupo de trabajo multisectorial encargado de consensuar y proponer acciones para la recuperación del Centro Histórico de Lima. Este grupo funcionará por seis meses durante los que presentará propuestas viables para la intervención y recuperación del Centro Histórico a corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración el presente riesgo de pérdida del patrimonio y los planes maestros existentes. Con forma este equipo es un esfuerzo importante y debe ser resaltado pues se trata de una nueva iniciativa para solucionar los problemas urgentes de la zona monumental.

El equipo seguirá la línea de múltiples esfuerzos que se vienen dando para la recuperación del Centro Histórico desde 1991, cuando fue nombrado Patrimonio Cultural de la Hu-

manidad. Algunos ejemplos son los estudios y campañas del Patronato de Lima y los planes realizados durante el gobierno municipal de Ricardo Belmont, no olvidando que la revalorización del Centro Histórico ha sido tarea principalmente de las administraciones municipales posteriores (Alberto Andrade, Luis Castañeda y Susana Villarán).

Desde 1991 se ha avanzado considerablemente, pero el Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional estima que actualmente el 83% de los edificios monumentales registrados (de los más de 600 existentes) corre peligro de colapsar. Estos edificios en muchas ocasiones son utilizados con fines comerciales (u otros usos) que no se encuentran regulados, lo que causa el deterioro o incluso la destrucción del patrimonio.

Un claro ejemplo son las casonas de la Plaza Dos De Mayo, de las cuales una se incendió en el 2014 y otra a inicios del 2017 (pese a que hubo mucho debate sobre los problemas del Centro Histórico y la conservación del patrimonio tras el primer incendio). Además, las casonas que son utilizadas como vivienda normalmente se encuentran tugurizadas y en condiciones que no solo atentan contra el

patrimonio, sino que ponen en riesgo a sus habitantes.

En las últimas décadas han existido planes para la recuperación del Centro Histórico y planes generales para Lima (como el PLAM 2035), pero estos no suelen ejecutarse plenamente, principalmente por falta de continuidad en la visión de los mandatarios. Lo mismo sucede con las obras. Por ejemplo, durante la gestión de Villarán se comenzó a construir el proyecto Vía Parque Rímac, pero el proyecto Río Verde (que formaba parte de este), fue cancelado por la administración de Castañeda. El dinero destinado a esta obra fue utilizado para construir el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio.

En el Centro Histórico, la gran mayoría de intervenciones se ha orientado a renovar las zonas turísticas y no a mejorar los servicios para la población. El contraste que existe entre el “eje turístico” que va desde el Parque de la Exposición hasta la Plaza de Armas y el resto del Centro Histórico es notable. Lo más preocupante es que gran parte del patrimonio monumental se encuentra en las zonas abandonadas. Cabe recordar que la “postal” tradicional que conocemos del Centro Histórico

realmente no es tan histórica. Por ejemplo, el Palacio de Gobierno fue construido entre los años 1926 y 1938, y la Catedral de Lima, si bien data de 1535, fue totalmente remodelada después del terremoto de 1940. Difícilmente estas obras arquitectónicas resultan ejemplos de la Lima Colonial.

Para rescatar el centro histórico es fundamental realizar un diagnóstico del patrimonio para determinar el estado real de la situación. Al mismo tiempo, se deben revisar las normas vigentes de modo que estas realmente ayuden a preservar la ciudad. Estas deben brindar un marco legal para que las intervenciones sean a largo plazo. La visión del Centro Histórico debe ser integral, no es suficiente trabajar intervenciones aisladas como ha sucedido en décadas anteriores.

Lo primero que debería plantearse el nuevo grupo de trabajo es la visión que se quiere para el Centro Histórico. ¿Qué es lo que se busca? ¿Mantener la postal que conocemos de Lima? ¿Revalorizar el pasado colonial o prehispánico? ¿Mejorar el Centro Histórico para sus habitantes? Una vez que esto esté claro se podrá comenzar a hacer propuestas coherentes y que no caigan en el olvido. ■